



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013

El artículo 3.m) del Decreto 29/2006, de 24 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se crean y regulan los órganos de Defensa de la Competencia en Aragón, dispone, como competencia atribuida al Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón (en adelante, TDCA), la de

“elaborar una memoria anual de la situación de la competencia en Aragón y de las actividades realizadas por el propio Tribunal, que será remitida al Gobierno de Aragón por el Presidente del Tribunal”.

De acuerdo con el precepto transcrito, el TDCA, en su sesión celebrada el día 5 de mayo de 2014, adoptó por unanimidad el Acuerdo de aprobar las memorias de 2012 y 2013 y remitirlas al Consejo de Economía y empleo del Gobierno de Aragón.

INDICE

I. PRESENTACION.

II. EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ARAGON.

- 1. Constitución y funciones.**
- 2. Composición.**

III. ACTIVIDADES TDCA EN 2013.

- 1. Actividades de difusión social de la existencia, competencias y actuaciones, desarrolladas por el TDCA.**
- 2. Actividades resultantes de la ejecución de las principales funciones atribuidas.**
 - A) Sesiones celebradas.
 - B) Memoria.
 - C) Resoluciones adoptadas por el Pleno del TDCA sobre conductas prohibidas.
 - D) Sanciones impuestas por el Pleno del TDCA.
 - E) Otras resoluciones dictadas por el Pleno del TDCA.
- 3. Actividades relacionadas con otros Órganos de la Libre Competencia.**

IV. PRESUPUESTOS DEL TDCA.

V. ANEXO NORMATIVO

I. PRESENTACION.

La política de la defensa de la competencia es un instrumento fundamental de la política económica, dirigida a fomentar el crecimiento económico. El buen funcionamiento de los mercados, que las empresas compitan en términos de igualdad unas con otras y que los consumidores puedan comprar a precios competitivos, es un requisito esencial para fomentar la actividad económica.

El Gobierno de Aragón asumió las competencias en materia de defensa de la competencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma mediante el Decreto 29/2006, de 24 de enero (BOA de 10 de Febrero de 2006). Con este Decreto se dispuso la creación de los órganos autonómicos encargados de la defensa de la libre competencia. Estos órganos son el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón y el Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón.

El Tribunal actúa con plena independencia, al margen de cualquier directriz jerárquica o funcional con respecto al Gobierno de Aragón. Las garantías de independencia e imparcialidad de los miembros del Tribunal, se basan en las siguientes características:

- El plazo de nombramiento, es superior al periodo legislativo.
- Las causas de cese, están bien delimitadas, e impiden el cese arbitrario o discrecional por parte del Gobierno.
- El régimen estricto de incompatibilidades, establecido por la normativa.
- La inexistencia de retribuciones periódicas a los miembros, y
- La exigencia de cualificación técnica reconocida.

Por su parte, el Servicio de Defensa de la Competencia, es un órgano administrativo, que a lo largo de 2012, estuvo adscrito al Departamento de Economía y Empleo, cuya responsabilidad es la de vigilar, inspeccionar e investigar, conductas restrictivas de la competencia. Las principales funciones que realizará en el cumplimiento de estos objetivos, serán:

- Instruir expedientes de conductas sobre las que debe de pronunciarse el Tribunal.

- Vigilar la ejecución y el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal, y
- Realizar estudios e informes que sirven para detectar posibles fallos del juego de la libre competencia.

II. EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ARAGON (TDCA).

1. Constitución y funciones.

El Decreto 29/2006, de 24 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se crean y regulan los órganos de Defensa de la Competencia en Aragón, optó por un modelo tradicional en la configuración de los órganos autonómicos encargados de la aplicación de la legislación antitrust, pues junto con un órgano típicamente resolutorio, el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón (en adelante, TDCA), se creó otro dirigido principalmente a la instrucción de los distintos expedientes y elevación de las oportunas propuestas, el Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón (en adelante SDCA). Desde entonces el TDCA ha venido ejerciendo las funciones que corresponden a la Comunidad Autónoma de Aragón respecto al ejercicio de competencias de naturaleza ejecutiva reconocidas en la Ley de Defensa de la Competencia, dentro del ámbito territorial de Aragón.

Por su parte la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, recogió en su artículo 71 las competencias exclusivas que correspondían a la Comunidad Autónoma incluyendo como 24ª la Promoción de la competencia, anotando especialmente *“el establecimiento y regulación del Tribunal de Defensa de la Competencia, como órgano independiente al que corresponde en exclusiva tratar de las actividades económicas que se lleven a cabo principalmente en Aragón y que alteren o puedan alterar la competencia”*.

El diseño del TDCA que se hizo en el momento de su constitución tomó como referencia la entonces vigente Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, que posteriormente fue derogada y sustituida por la vigente Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante LDC), que tiene importantísimas consecuencias prácticas, puesto que modifica las funciones atribuidas a los órganos encargados de la aplicación de la normativa protectora de la libre competencia. Por ello, es de máxima importancia tener presente el esquema de funciones, facultades y potestades que se atribuyen en el nuevo texto legal al TDCA. Así, cabe señalar, de modo extraordinariamente esquemático, lo siguiente:

- La LDC contiene una cláusula general habilitante a favor de los órganos autonómicos encargados de su aplicación. En este sentido, la norma ordena una equiparación de la autoridad autonómica antitrust con la Comisión Nacional de la Competencia (en adelante, CNC) y que se acoge, para el ámbito territorial respectivo, en la Disposición Adicional 8ª LDC.
- En virtud de la citada equiparación, las funciones, facultades y potestades atribuidas a la CNC también se asignan a los órganos autonómicos y, por tanto, en razón de su caracterización, al TDCA y al SDCA. No obstante lo anterior, habrá que excluir aquellas materias en que media una reserva a favor de la CNC (por ejemplo en la aplicación de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión europea –anteriores artículos 81 y 82 TCE) o en que se modula la competencia de los órganos autonómicos.

En desarrollo de esta estructura orgánica y funcional el TDCA, en el ejercicio de sus competencias, tiene como finalidad principal promover y preservar, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón, el funcionamiento competitivo de los mercados y la existencia de una competencia efectiva; es decir, se hace preciso atender a dos tipos de actuaciones claramente diferenciadas:

1. Promover la competencia, que se refiere a todo lo que ha de influir en conductas futuras.
2. Preservar la competencia, que se refiere a lo que entiende de corregir conductas pasadas.

Del análisis conjunto de la LDC y del ya citado Decreto 29/2006, de 24 de enero, resulta que corresponde al TDCA el ejercicio de las siguientes funciones:

- a) El seguimiento de conductas prohibidas por los artículos 1 2 y 3 de la LDC, lo que incluye tanto la supervisión del mercado para detectar conductas anticompetitivas y ordenar al Servicio de Defensa de la Competencia que investigue, como la resolución de los expedientes incoados, sea como consecuencia de denuncias de particulares o debidos a la actuación de oficio de la propia administración.
- b) El desarrollo de funciones consultivas tanto sobre proyectos y proposiciones de normas que afecten a la libre competencia (artículo 25.a LDC), colaborando así en la mejora de la regulación, como sobre actuaciones concretas a solicitud de las administraciones públicas (artículo 3.i DDCAR).

- c) Promover la existencia de una competencia efectiva en el mercado aragonés mediante la realización de estudios y trabajos de investigación, en materia de competencia, sobre los distintos sectores con propuestas, en su caso, de desregulación o modificación normativa (artículo 26.1.a y b LDC).
- d) Realizar informes sobre la actuación del sector público y, en concreto, sobre las situaciones de obstaculización del mantenimiento de la competencia efectiva en los mercados que resulten de la aplicación de normas legales (artículo 26.1.c LDC), sobre el impacto de las ayudas públicas sobre la competencia efectiva en los mercados (artículo 26.1.d LDC). Como corolario, dirigir a las Administraciones Públicas propuestas para la modificación o supresión de las restricciones a la competencia efectiva derivadas de su actuación, así como, en su caso, las demás medidas conducentes al mantenimiento o al restablecimiento de la competencia en los mercados (artículo 26.1.e LDC).
- e) Procurar un acercamiento efectivo de la defensa de la competencia a los agentes que intervienen en los mercados, mediante la colaboración más estrecha con asociaciones empresariales y de consumidores, la elaboración y difusión de guías sobre diferentes ámbitos del mercado, preparar e impartir cursos sobre defensa de la competencia, etc.
- f) Relaciones con otras autoridades de defensa de la competencia: Comisión Nacional de la Competencia y autoridades autonómicas. Se incluye aquí tanto la emisión de los informes que sean expresamente solicitados (en conductas prohibidas o concentraciones) como la participación efectiva en las funciones de cooperación y coordinación llevadas a cabo desde la autoridad nacional (grupos de trabajo, cooperación no reglada en el seguimiento de sectores del mercado, etc.).
- g) En resumen, y en el mismo nivel de importancia y requerimiento de atención, el Tribunal ha de promover y preservar en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón el funcionamiento competitivo de los mercados y procurar la existencia de una competencia efectiva en los mismos. En ese sentido, los requerimientos se concretan en que, como vemos, el Tribunal ha de resolver los procedimientos administrativos, desde luego, pero también:

- Emitir informes a iniciativa propia o cuando sea solicitado para ello por el Gobierno de Aragón o sus Consejeros, el Pleno de las Cortes de Aragón o sus Comisiones, las Entidades Locales y las organizaciones empresariales, los sindicatos de trabajadores y las asociaciones de consumidores y usuarios, lo que puede representar un elevado número de peticiones.
- Instar la instrucción de Procedimientos por el Servicio, lo que implica mantener un observatorio de las conductas.
- Dirigir sugerencias o propuestas de actuación relativas a la libre competencia a cualquier poder u órgano de la Comunidad Autónoma de Aragón o de las Entidades Locales aragonesas, que requiere también seguimiento.
- Mantener las relaciones de coordinación y cooperación con otros órganos u organismos análogos del Estado o las Comunidades Autónomas. Implica desplazamientos y dedicación.
- Efectuar seguimiento de las ayudas públicas, elaborar informe de la situación global de la competencia de Aragón, etc.

La reciente entrada en vigor de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, y la constitución y puesta en funcionamiento de este nuevo organismo, ha afectado a la LDC, de la que han quedado derogados sus artículos 12, 17, 40 y todo el Título III (artículos 19 a 35), relativo a la regulación de la Comisión Nacional de la Competencia, que ha sido sustituida por la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Sin embargo, la incidencia que esta nueva norma y la nueva configuración del órgano encargado de resolver los expedientes en materia de conductas prohibidas (entre otras muchas materias) tiene una incidencia puramente testimonial sobre las atribuciones de la autoridad aragonesa de defensa de la competencia.

El artículo 5.1.c) de la nueva Ley 3/2013, de 4 de junio, con la finalidad de garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios, asigna a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la competencia, entre otras, para “aplicar lo dispuesto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, en materia de conductas que supongan impedir, restringir y falsear la competencia”, pero lo cierto es que lo hace

“sin perjuicio de las competencias que correspondan a los órganos autonómicos de defensa de la competencia en su ámbito respectivo (...)”, lo que supone una remisión a lo dispuesto en la Ley 1/2001, de 21 de febrero, de Coordinación de competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, disposición ésta que no se ha visto afectada en su contenido por la nueva norma.

En ejercicio de dicha competencia, la incoación e instrucción de un expediente sancionador en materia de conductas prohibidas corresponde al SDCA en aplicación del artículo 11.a) del Decreto 29/2006, de 24 de Enero, del Gobierno de Aragón, por el que se crean y regulan los órganos de Defensa de la Competencia de Aragón, y la competencia para resolver el procedimiento al TDCA en aplicación del artículo 3.a) del mismo Decreto.

Ambos preceptos tienen como fundamento legal (una vez derogada la ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, a la que se remitían) los artículos 49 a 54 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y los correlativos del Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado mediante Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero (en adelante RDC), respecto de los que había que entender que las referencias al Consejo de la CNC y a la Dirección de Investigación debían entenderse realizadas a los respectivos órganos autonómicos en aplicación de la disposición adicional octava de la LDC.

Estos preceptos, que fundamentan la competencia autonómica, conservan su vigencia puesto que no han sido derogados por la nueva ley. Únicamente resultaba necesario corregir las obsoletas referencias que en ellos se contienen al Consejo de la CNC y a la Dirección de Investigación y que ya han desaparecido. Esta función la cumple el párrafo segundo de la disposición adicional segunda de la Ley 3/2013, de 4 de junio, conforme al que las referencias a la CNC hay que entenderlas ahora realizadas a la CNMC (de la cual el Consejo es el competente para la resolución de los procedimientos sancionadores en materia de conductas prohibidas de defensa de la competencia, tal y como dispone el artículo 20.2 de la Ley 3/2013) y las referencias a la Dirección de Investigación hay que entenderlas efectuadas a la Dirección de Competencia de la CNMC (que es la encargada de la instrucción de los expedientes en materia de conductas prohibidas, según el artículo 25.1.a) de la misma Ley).

En consecuencia, y en aplicación conjunta de la disposición adicional octava LDC y de la disposición adicional segunda de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, las referencias

contenidas en la LDC a los órganos de instrucción y resolución de este tipo de expedientes habrá que entenderlas realizadas, en el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón, respectivamente al SDCA y al TDCA.

2. Composición.

Durante el año 2013 la composición del TDCA se ha mantenido sin cambios respecto al final del ejercicio anterior, es decir, es la prevista en el Decreto 341/2011, de 14 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se designa el Presidente y los Vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón (BOA nº 210, de 25 de octubre), incluyendo el cambio operado mediante Decreto 175/2012, de 17 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se cesa, a petición propia, a un vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón y se designa otro vocal.

Así pues, la composición actual del TDCA es la siguiente:

- Presidente. D. Javier Oroz Elfau
- Vocales: D. Ignacio Moralejo Menéndez
D^a. Mercedes Zubiri de Salinas
D. Carlos Corral Martínez
D. Javier Nieto Avellaned
- Secretario: D. Eloy Fernández Pérez-Aradros
- Letrado Asesor: D^a. Isabel Caudevilla Lafuente

III. ACTIVIDADES DEL TDCA.

En ejecución de las competencias señaladas en el apartado anterior, y de acuerdo con los objetivos que ha de atender esta memoria, se reseñan las principales actividades llevadas a cabo por este TDCA.

1. Actividades de difusión social de la existencia, competencias y actuaciones desarrolladas por el TDCA.

Igual que en años anteriores la presencia en los medios de comunicación, que se arbitró a través del gabinete de prensa del Gobierno de Aragón, continuó con la elaboración de las oportunas notas de prensa relativas a las actuaciones del TDCA. De igual manera, sus miembros, cuando así fueron requeridos, ofrecieron las correspondientes entrevistas así como otro tipo de intervenciones requeridas por los medios de comunicación.

Se ha continuado con la labor de actualización de la página web del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón (www.tdca.es), cuya creación tuvo lugar oficialmente el 13 de diciembre de 2012.

La página web ofrece información general sobre la composición y funciones del TDCA. Asimismo, informa de cuáles son los expedientes que son objeto de tramitación en el Tribunal, diferenciando la mera indicación de aquéllos que están en trámite, respecto de los que ya han finalizado. En este último supuesto se incluyen a texto completo las resoluciones en materia de conductas prohibidas que ha sido dictadas por el Tribunal desde que comenzó el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, se incluyen también los informes emitidos por el Tribunal, de entre los que cobran especial relevancia los emitidos respecto a disposiciones normativas que pueden afectar a la libre competencia.

También se incluyen las memorias de los ejercicios en los que el TDCA ha venido desarrollando sus funciones y, en aras del principio de transparencia en la actuación de este órgano, el presupuesto con el que el Tribunal ha contado desde su origen para llevar a cabo su actividad.

Finalmente, se incluyen también otras llamadas habituales en este tipo de páginas como links a otras páginas de las distintas autoridades de competencia, o la forma de contacto con el Tribunal.

2.- Actividades resultantes de la ejecución de las principales funciones atribuidas.

A) Sesiones celebradas.

En el periodo de tiempo que comprende esta memoria, año 2013, el TDCA ha celebrado 6 reuniones plenarias. Las fechas fueron las siguientes: el 20 de marzo, 29 de mayo, 6 de junio, 30 de julio, 8 de octubre y 6 de noviembre.

B) Memoria.

La memoria de actividades de 2012 quedó pendiente y se ha tramitado junto a la de 2013.

C) Resoluciones adoptadas por el Pleno del TDCA sobre conductas prohibidas.

Acuerdo de 20 de marzo de 2013. Asunto “Colegio de Economistas de Aragón”.- En este asunto el TDCA analizó, desde la perspectiva del Derecho protector de la libre competencia, la existencia de una posible conducta prohibida por el artículo 1 de la LDC, realizada por el Colegio Oficial de Economistas de Aragón, consistente, según la denuncia, en exigir a los economistas su colegiación específica en dicho Colegio Oficial para acceder al listado de peritos judiciales y administradores concursales.

A la vista de la documentación obrante en el expediente, el TDCA considera que lo que, en definitiva, impidió al denunciante estar incorporado en las listas del año 2011 fue un defecto formal y no la exigencia de colegiación en el Colegio de Economistas de Aragón, como lo demuestra el hecho de que sí quedara incorporado en las listas de peritos judiciales para el año 2012, tal como se desprende de la documentación remitida por el Colegio en fecha 27 de enero de 2012. El Tribunal concluye que no existen indicios racionales para acordar la incoación de un

expediente sancionador por infracción de una conducta prohibida en el artículo 1 de la LDC, al no concurrir los elementos exigibles para apreciar la exigencia de multicolegiación para la inclusión en las listas de peritos judiciales y administradores concursales en los términos del citado artículo, por lo que procede al archivo del expediente.

Acuerdo de 22 de mayo de 2013. Asunto “Turismo de Albarracín”.- En este acuerdo se examina el expediente tramitado por el Servicio de la Competencia de Aragón bajo el número 7/2010, en virtud de denuncia, contra la empresa de guías denominada “El Andador” por la realización de determinadas actuaciones en el ámbito turístico de Albarracín (Teruel) que estiman contraria a la buena práctica de la competencia, consistentes en captar turistas en la calle, cobrar las visitas que realizan por la ciudad, programar itinerarios a favor de comercios afines, descalificar al resto del comercio y servicios turísticos existentes en el municipio, derivar intencionadamente a establecimientos hosteleros y de restauración a cambio de promoción de la empresa. A la vista de las actuaciones incorporadas al expediente, el TDCA concluye, en línea con lo propuesto por el Servicio de Defensa de la Competencia, que no concurren indicios ni pruebas suficientes que permitan considerar acreditado que se haya producido infracción de los artículos 1, 2 y 3 LDC por parte de la empresa denunciada en el ejercicio de su actividad de visitas guiadas en la ciudad de Albarracín, por lo que se procede al archivo de la denuncia.

Acuerdo de 8 de octubre de 2013. Asunto “Autoescuelas de Zaragoza”.- En este acuerdo el TDCA examine el expediente incoado a raíz tanto del requerimiento del propio Tribunal como de la denuncia formulada por la UCA contra las autoescuelas de la ciudad de Zaragoza.

Este acuerdo, que es continuación del anterior de febrero de 2011, en el que se resolvió archivar la denuncia respecto de determinadas autoescuelas y respecto de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Zaragoza, resuelve declarar acreditada la existencia de una concertación de precios prohibida por el artículo 1.1.a) LDC, respecto de la preparación para la obtención del permiso de conducir tipo "B" en la ciudad de Zaragoza, efectuada por un total de 46 autoescuelas a las que se impone una sanción económica que, en conjunto, asciende a 302.604,96 € (trescientos dos mil seiscientos cuatro euros con noventa y seis céntimos).

La resolución ha sido objeto de 19 recursos contencioso administrativos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que, a fecha de elaboración de esta memoria, sigue pendiente de dictar sentencia.

Previamente a dicho acuerdo, en el seno de este expediente, el TDCA adoptó, además, las siguientes resoluciones:

- Resolución 2/2013. El TDCA deniega la prueba solicitada por varias autoescuelas y ordena al SDCA la realización de actuaciones complementarias en orden a esclarecer determinados aspectos del expediente. Se suspende el plazo para dictar resolución.
- Resolución 4/2013. El TDCA da por recibidas las actuaciones complementarias ejecutadas por el SDCA y acuerda su traslado a los interesados y la apertura de un trámite de audiencia para la presentación de alegaciones por los interesados. Asimismo, se levanta la suspensión ordenada en el Acuerdo anterior. Por otro lado, se procede a la ampliación del plazo para dictar resolución en cuatro meses y se requiere a determinadas autoescuelas para que aporten documentación, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo se podrán imponer multas coercitivas.
- Resolución 5/2013. Se amplía el plazo para formular alegaciones frente a las actuaciones complementarias elaboradas por el SDCA en atención a la solicitud efectuada por el representante de varias autoescuelas.
- Resolución 6/2013. Se requiere información adicional a la empresa titular de una de las autoescuelas objeto de estudio, con el apercibimiento de que en caso de no atender al requerimiento podrá procederse a la imposición de multas coercitivas.
- Resolución 7/2013. Se resuelve sobre la confidencialidad de determinados documentos aportados al expediente por las autoescuelas de Zaragoza en atención a la solicitud efectuada por el SDCA a fin de realizar las actuaciones complementarias ordenadas.
- Resolución 8/2013. Se imponen una multa coercitiva a una de las autoescuelas imputadas por incumplimiento del deber de colaboración y no aportar la documentación requerida. Se ofrece nuevo plazo para entregar documentación.

Acuerdo de 6 de noviembre de 2013. Asunto “Colegio de Abogados de Huesca”.- Mediante este acuerdo el TDCA analiza, desde la perspectiva de la LDC, la actuación realizada por D. Francisco de Asís Gabriel Tena, abogado colegiado del Colegio de Abogados de Huesca, así como por este Colegio Profesional, en relación con la presunta aprobación por parte de esta Corporación de un cuadro de honorarios mínimos, obligatorio o recomendado y su aplicación por el letrado denunciado, al efecto de determinar si estas conductas pueden ser constitutivas de una infracción regulada por la citada ley.

Las actuaciones incorporadas en el expediente llevan a Tribunal al convencimiento, de conformidad con lo propuesto por el Servicio de Defensa de la Competencia, de que no existen indicios de la comisión de ninguna infracción de los artículos 1, 2 y 3 LDC por parte de ninguno de los denunciados, por lo que procede al archivo del expediente.

Acuerdo de 6 de noviembre de 2013. Asunto “Guarderías de Calatayud”.- Mediante este acuerdo el TDCA resuelve sobre la denuncia presentada por la titular de una guardería privada del municipio de Calatayud contra el Ayuntamiento de esa misma localidad, por una presunta conducta contraria a la Ley de Defensa de la Competencia, en concreto, por la realización de una práctica desleal por parte de dicho Ayuntamiento consistente en que el Ayuntamiento de Calatayud abrió dos guarderías municipales que están creando una competencia insalvable para la guardería privada de la denunciante.

Tras constatar que las plazas públicas de guardería ofertadas por en el municipio no son de titularidad municipal sino que hay otra guardería privada y dos públicas, una del ayuntamiento y otra del Gobierno de Aragón, teniendo en cuenta también la situación del mercado descrito, y finalmente considerando que la conducta del Ayuntamiento de Calatayud goza de habilitación legal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la LDC (que le reconoce el artículo 15 de la Ley Orgánica de Educación), se resuelve el archivo de la denuncia.

Resolución de 6 de noviembre de 2013. Asunto “Universidad San Jorge”. En este asunto, el TDCA analizó los hechos denunciados por la Fundación Universidad San Jorge, en el que pone de manifiesto determinados hechos que estima contrarios a las normas de defensa de la competencia realizados por el Gobierno de Aragón,

consistentes en la emisión de un informe desfavorable a la implantación del Grado de Psicología de la Universidad San Jorge.

El Tribunal considera que dicho informe es emitido en cumplimiento de las competencias atribuidas al Gobierno de Aragón por la normativa reguladora de la enseñanza universitaria y no puede ser analizado desde la perspectiva de la Ley de Defensa de la Competencia. Y ello es así porque, en relación con los hechos denunciados, la Administración Pública (Departamento de Educación del Gobierno de Aragón) está actuando en su función reguladora y no como operador económico, es decir, la decisión de no autorizar la implantación del grado de psicología ha sido tomada por la Administración competente, la Comunidad Autónoma de Aragón, y en las funciones que la Ley le encomienda, por lo que, aunque afectara a la libre competencia estaría amparada en una norma legal. En consecuencia, no corresponde a los órganos de defensa de la competencia analizar la motivación recogida en los informes desfavorables emitidos por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón puesto que se trata de un control de legalidad de los actos administrativos que está atribuido con carácter exclusivo y excluyente a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

D) Sanciones impuestas por el Pleno del TDCA.

Durante el año 2013 el TDCA impuso, dentro del expediente sancionador 3/ 2009, Asunto “Autoescuelas de Zaragoza”, y mediante resolución de 8 de octubre de 2013, una sanción económica a 46 empresarios, titulares de otras tantas autoescuelas de la ciudad de Zaragoza, por un importe total acumulado de 302.604,96 € (trescientos dos mil seiscientos cuatro euros con noventa y seis céntimos).

E) Otras resoluciones dictadas por el Pleno del TDCA.

Informe de 20 de marzo de 2013, sobre el Decreto-Ley 1/2013, de 9 de enero, por el que se modifican la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de ordenación de la actividad comercial y la Ley 7/2005, de 4 de octubre, de horarios comerciales y apertura de festivos. El informe se emite por iniciativa propia al no haber sido requerido para

pronunciarse acerca de las medidas liberalizadoras de la actividad comercial. Desde el punto de vista de la competencia, el Tribunal Aragonés valora de forma positiva la norma autonómica al promover la liberalización comercial de jornadas, promociones y horarios. A juicio del TDCA, “los cambios efectuados permitirán que cada comerciante optimice los periodos de mayor interés comercial para establecer temporada de rebajas y su duración, lo cual no puede redundar sino en una mejora de la competencia en el sector minorista y en innegables beneficios para el consumidor.”

Se valora como “conservadora” la decisión de acogerse a las noventa horas de horario máximo global durante el conjunto de días laborales de la semana, ya que se trata de la exigencia mínima que marca la norma estatal. En cuanto a la medida de la apertura de domingos y festivos, el tribunal aragonés la considera “moderadamente liberalizadora “en relación con la adoptada por otras CCAA como Madrid, cuyo criterio es la libertad de apertura o Murcia que lo ha fijado en 12 días , por ejemplo.

Finalmente, cabe destacar la medida autonómica relativa a los establecimientos de superficie útil de exposición y venta inferior a 300 metros cuadrados ya que, tienen distintas limitaciones según estén dirigidas por pymes o pertenezcan a franquicias y grandes cadenas comerciales. En el caso del “pequeño comercio” gozarán de libertad de horario mientras que, si pertenecen a grandes empresas o grupos de distribución, deberán efectuar sus aperturas en los periodos de tiempo convenientes. Para el TDCA, se trata de” una medida discriminatoria, acogida asimismo por la norma nacional, que carece de justificación desde el punto de vista competitivo y que se funda en la voluntad de intervenir sobre la oferta con motivos proteccionistas y en consecuencia su permanencia debería ser reconsiderada”.

Informe de 29 de mayo de 2013, solicitado por el Consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 LDC, sobre el anteproyecto de Decreto del Gobierno de Aragón por el que se regulan y convocan ayudas al desarrollo de Redes de Investigadores, Movilidad y Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico, en el marco de cooperación de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (2014-2015). A la vista del anteproyecto y de la documentación que lo acompaña, el TDCA en sesión de 29 de mayo de 2013, emitió informe positivo sobre el anteproyecto de decreto como base reguladora de tales ayudas, dada su aportación al interés común frente a las prácticamente nulas consecuencias sobre la libre competencia.

3. Actividades en relación con otros Órganos de Defensa de la Libre Competencia.

El TDCA a lo largo del año 2013 realizó las siguientes actividades en relación con otros órganos de la Competencia bien de carácter estatal, como son el Consejo de Defensa de la Competencia, del que forma parte en representación de Aragón, y la Comisión Nacional de la Competencia, bien de carácter autonómico como son todos los diferentes órganos creados en las Comunidades Autónomas con competencia en la defensa de la libre competencia. Así se asistió a:

- Reuniones del Consejo de Defensa de la Competencia
 - Sesión del día 18/6/2013
- Reuniones de los Grupos de Trabajo en la CNC
 - Grupo de Trabajo de Asignación de Expedientes: una reunión en mayo de 2013 en Madrid.
 - Grupo de Trabajo de Promoción de la Competencia: una reunión en mayo en Madrid.
- Jornadas y seminarios sobre temas relacionados con la Defensa de la Competencia
 - VII Jornadas nacionales de Defensa de la Competencia en abril de 2013, en Madrid.

IV. PRESUPUESTO DEL TDCA.

1. Presupuesto de Gastos 2013

	PRESUPUESTO
GASTOS DE PERSONAL	<u>0</u>
GASTOS CORRIENTES	<u>63.287,50</u>
• Material de oficina	8.125,00
• Gastos diversos	23.950,00
• Indemnizaciones por razón del servicio	31.212,50
TOTAL PRESUPUESTO	<u>63.287,50</u>

2. Ejecución del Presupuesto de Gastos 2013.

	PRESUPUESTO
GASTOS DE PERSONAL	<u>0</u>
GASTOS CORRIENTES	<u>27.837,58</u>
• Material de oficina	1.800,00
• Gastos diversos	1.812,58
• Indemnizaciones por razón del servicio	24.225,00
TOTAL PRESUPUESTO	<u>27.837,58</u>

3. Presupuesto de Gastos 2014

	PRESUPUESTO
GASTOS DE PERSONAL	<u>0</u>
GASTOS CORRIENTES	<u>63.287,50</u>
• Material de oficina	8.125,00
• Gastos diversos	23.950,00
• Indemnizaciones por razón del servicio	31.212,50
TOTAL PRESUPUESTO	<u>63.287,50</u>

El presupuesto para el ejercicio de 2014 es coincidente con el de 2013.

V. ANEXO NORMATIVO.

DECRETO 29/2006, de 24 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se crean y regulan los órganos de Defensa de la Competencia en Aragón.

I

La adopción del sistema de economía de mercado como modelo económico responde al convencimiento de que este sistema, basado en la libre competencia, se muestra como el más eficiente en la asignación de los recursos, facilitando así la permanente adaptación del aparato productivo a los cambios de la demanda e impulsando el desarrollo económico y social. Esta asignación eficiente de los recursos tiene lugar porque los operadores económicos, como oferentes o proveedores de productos y servicios, compiten mediante la oferta de estos productos y servicios a los mejores precios. Para que esta asignación eficiente de los recursos tenga lugar, es preciso que los consumidores gocen, como jueces del sistema, de libertad de elección y que los operadores que están presentes en el mercado tengan mayores incentivos para ofrecer los mejores productos en precio y calidad. Así, no se puede afirmar que los consumidores gozan de libertad de decisión si, por la existencia de restricciones a la competencia, la composición de la oferta no es tan amplia en calidad y cantidad como la que podría existir en un mercado abierto a la competencia. Además, la libre competencia, como columna vertebral del sistema de economía de mercado, tiene entre sus funciones seleccionar a los operadores económicos. A través de esta función de selección de las empresas más eficientes en perjuicio de las ineficientes, se entiende que la competencia contribuye a asegurar la adaptación continua del aparato productivo a las situaciones siempre cambiantes del mercado. Esta selección económica propiciada por la libre competencia actúa en beneficio del interés general.

II

Por Sentencia 208/1999, de 11 de noviembre, el Tribunal Constitucional resolvió los recursos de inconstitucionalidad interpuestos frente a la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.

El fallo de la sentencia declara inconstitucional la cláusula «en todo o en parte del mercado nacional», contenida expresamente o por remisión en los artículos 4, 7, 9, 10, 11 y 25 a) y c) de la citada Ley, en la medida en que desconoce las competencias ejecutivas de la legislación estatal sobre defensa de la competencia atribuidas a las Comunidades Autónomas recurrentes en sus respectivos Estatutos, aunque difiere su nulidad hasta el momento en el que, establecidos por Ley estatal los criterios de conexión pertinentes, las Comunidades Autónomas puedan ejercitarlas.

Esencialmente dicha sentencia considera que la «defensa de la competencia» puede quedar, al menos en parte, incluida en la de «comercio interior» y destaca el hecho de que, en tal materia, los Estatutos de Autonomía reconocen al Estado la competencia de la legislación. El Tribunal Constitucional concluye que, con ello, las Comunidades Autónomas recurrentes han asumido competencias de naturaleza ejecutiva.

III

Conforme a la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en esta Sentencia, las Comunidades Autónomas cuyos Estatutos de Autonomía les atribuyen competencia en materia de «comercio interior» tienen ciertas competencias ejecutivas en la materia «defensa de la competencia», y este es el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón.

En efecto, conforme al artículo 35.1.19ª del Estatuto de Autonomía de Aragón, corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia exclusiva en: «Comercio interior y defensa del consumidor y del usuario, sin perjuicio de la política general de precios, de la libre circulación de bienes en el territorio del Estado y de la legislación sobre defensa de la competencia. Ferias y mercados interiores. Establecimiento y regulación de bolsas de valores y demás centros de contratación de mercancías y de valores, conforme a la legislación mercantil».

Así, pues, corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón el ejercicio del conjunto de competencias de naturaleza ejecutiva reconocidas en la Ley de Defensa de la Competencia, que se hayan de realizar dentro del ámbito territorial de Aragón, en relación con aquellas conductas que, sin poder restringir la competencia en un mercado de ámbito supraautonómico o en el conjunto del mercado estatal, sean

susceptibles de restringir la competencia en todo o en parte del mercado de esta Comunidad Autónoma.

IV

En la citada Sentencia, el Tribunal Constitucional también instó al Estado a promulgar, «en el plazo más breve posible», una norma con rango legal que estableciera «los criterios de conexión pertinentes» para que las Comunidades Autónomas que hubieran asumido competencias en materia de comercio interior pudieran ejercer las competencias ejecutivas antes referidas.

Este mandato del Tribunal Constitucional se cumple con la promulgación de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia.

Dicha Ley regula tres aspectos fundamentales sobre la materia. En primer lugar, establece los puntos de conexión que delimitan el ejercicio de las competencias que corresponden al Estado y a las Comunidades Autónomas.

En segundo lugar, crea la «Junta Consultiva en materia de conflictos» como mecanismo de resolución de los conflictos de competencia que pueda originar la aplicación de los puntos de conexión; establece un complejo sistema de coordinación basado en el intercambio recíproco de toda información relevante para la asignación de la competencia ejecutiva, y procede a la creación del «Consejo de Defensa de la Competencia» como mecanismo de encuentro entre las distintas Administraciones y de unificación de la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia en todo el ámbito estatal. Además, la Ley 1/2002 exige que los «órganos que en las Comunidades Autónomas ejerzan las funciones que en el Estado se atribuyen al Tribunal de Defensa de la Competencia, actúen con independencia, cualificación profesional y sometimiento al ordenamiento jurídico».

Por último, establece un régimen transitorio en tanto las Comunidades Autónomas no hayan creado sus respectivos órganos de defensa de la competencia, disponiendo que el Estado seguirá ejerciendo dichas competencias.

V

Es objeto del presente Decreto posibilitar el ejercicio de las competencias que la Comunidad Autónoma de Aragón tiene asumidas estatutariamente en materia de Defensa de la Competencia, mediante la creación y regulación de los órganos

administrativos necesarios para ello. Dichos órganos son el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón y el Servicio de Defensa de la Competencia.

Según el principio de racionalización del gasto público, el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón se ha configurado como un órgano administrativo colegiado sin estructura propia, adscrito al Departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón competente en materia de economía.

El Capítulo Primero del presente Decreto procede a la creación del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón y el Servicio de Defensa de la Competencia, como órganos administrativos encargados del ejercicio de las competencias respecto de los procedimientos que tengan por objeto las conductas previstas en los artículos 1, 6 y 7 y de las autorizaciones previstas en el artículo 4 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, cuando dichas conductas alteren o puedan alterar la libre competencia en el marco de la Comunidad Autónoma.

El Capítulo Segundo se divide en dos Secciones. En la primera se regula la naturaleza y competencias del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, y en la segunda la composición, estatuto de sus miembros, funcionamiento y dotación de medios del Tribunal.

El Capítulo Tercero se dedica a la creación y regulación jurídica del Servicio de Defensa de la Competencia, y a la creación del Registro de Defensa de la Competencia.

Por último, el Capítulo Cuarto establece el régimen jurídico a que queda sometida la actuación de los órganos administrativos de defensa de la competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón, dentro de los límites que la competencia ejecutiva sobre la materia permite.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, de acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 24 de enero de 2006,

DISPONGO:

CAPITULO PRIMERO

ORGANOS DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON

Artículo 1. *Creación de los órganos de Defensa de la Competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón.*

En ejercicio de las competencias que ostenta la Comunidad Autónoma de Aragón y en el marco de lo establecido en la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, se crean el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón y el Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón.

CAPITULO SEGUNDO

EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ARAGON

Sección 1ª. Naturaleza y competencias

Artículo 2. *Finalidad, prerrogativas, dependencia orgánica y sede.*

1. El Tribunal, en el ejercicio de sus competencias, tiene como finalidad promover y preservar en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón el funcionamiento competitivo de los mercados y la existencia de una competencia efectiva en los mismos.
2. Para el cumplimiento de sus fines el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón goza de los mismos derechos y prerrogativas que se reconocen al órgano equivalente del Estado. En consecuencia, el Tribunal tiene la potestad de efectuar intimaciones o requerimientos y de imponer las sanciones y multas coercitivas previstas en la legislación de defensa de la competencia.
3. El Tribunal, adscrito orgánicamente al Departamento competente en materia de Economía, ejerce sus funciones con plena independencia y sometimiento al ordenamiento jurídico.
4. El Tribunal tiene su sede en la capital de la Comunidad Autónoma y extiende su competencia a todo el territorio de la misma.

Artículo 3. Competencias.

El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, según lo establecido en la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, ejercerá las siguientes atribuciones:

- a) Resolver los procedimientos administrativos que tengan por objeto las conductas previstas en los artículos 1, 6 y 7 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, cuando dichas conductas alteren o puedan alterar la libre competencia en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón, sin afectar a un ámbito superior o al mercado nacional.
- b) Otorgar las autorizaciones a que se refiere el artículo 4 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia cuando sean competencia de esta Comunidad Autónoma según los puntos de conexión establecidos en la Ley 1/2002, de 21 de febrero.
- c) Adoptar, de acuerdo con cuanto dispone la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, todas cuantas medidas cautelares estime oportunas a fin de asegurar la efectividad de sus resoluciones.
- d) Emitir informe en los procedimientos de control de las operaciones de concentración económica regulados en la normativa de Defensa de la Competencia, cuando así lo solicite el Tribunal estatal de Defensa de la Competencia.
- e) Enviar al Tribunal estatal de Defensa de la Competencia la información que le pueda solicitar en el marco del procedimiento de control de concentraciones regulado en la normativa de Defensa de la Competencia.
- f) Solicitar su personación en los procedimientos de control de las operaciones de concentración económica sujetos a la normativa de Defensa de la Competencia, cuando el proyecto o la operación tenga efectos principales o relevantes sobre empresas radicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- g) Instar, en su caso, la instrucción y tramitación por el Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón de procedimientos en materia de defensa de la competencia.

- h) Dirigir sugerencias o propuestas de actuación relativas a la salvaguarda de la libre competencia a cualquier poder u órgano de la Comunidad Autónoma de Aragón o de las Entidades Locales aragonesas.
- i) Emitir informes en materia de libre competencia a iniciativa propia o cuando sea solicitado para ello por el Gobierno de Aragón o sus Consejeros, el Pleno de las Cortes de Aragón o sus Comisiones, las Entidades Locales aragonesas a través de su Alcalde o Presidente y las organizaciones empresariales, los sindicatos de trabajadores y las asociaciones de consumidores y usuarios.
- j) Emitir informe, con carácter no vinculante, sobre la apertura de grandes establecimientos comerciales cuya influencia quede circunscrita al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- k) Emitir el informe a que se refiere el artículo 13 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, cuando así le sea requerido por la autoridad judicial competente, y de acuerdo con los puntos de conexión establecidos en la Ley 1/2002, de 21 de febrero.
- l) Mantener las oportunas relaciones de coordinación y cooperación con otros órganos u organismos análogos del Estado o las Comunidades Autónomas. A estos efectos el Tribunal podrá celebrar, previa autorización del Gobierno de Aragón, los convenios de colaboración a que se refiere el artículo 4.1 de la Ley 1/2002.
- m) Elaborar una memoria anual de la situación de la competencia en Aragón y de las actividades realizadas por el propio Tribunal, que será remitida al Gobierno de Aragón por el Presidente del Tribunal.
- n) Emitir informe, con carácter preceptivo, sobre los anteproyectos de Ley o proyectos de Decreto por los que se modifique o derogue, total o parcialmente, el presente Decreto, así como respecto de las normas que se dicten para su desarrollo.
- o) Cualquier otra que le atribuya el ordenamiento jurídico.

Sección 2ª. Composición, estatuto de sus miembros, funcionamiento y dotación de medios

Artículo 4. Composición del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón.

1. El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón está integrado por un Presidente y cuatro Vocales.
2. Todos los miembros del Tribunal deberán contar con una contrastada cualificación técnica en el mundo del Derecho, la Economía u otros sectores profesionales relacionados con la libre competencia en los mercados.
3. El Tribunal contará con un Secretario, con voz pero sin voto, que será un funcionario del Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de Economía; así mismo el Tribunal contará con un Letrado del Gobierno de Aragón que asistirá a las sesiones del Tribunal con voz pero sin voto.

Artículo 5. *Nombramiento y cese de sus miembros.*

1. El Presidente y los Vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón serán nombrados por Decreto del Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero del Departamento competente en materia de Economía, por un período de cinco años, y renovables por una sola vez.
2. Los miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón cesan por alguna de las causas siguientes:
 - a) Por fallecimiento.
 - b) Por renuncia.
 - c) Por expiración del plazo de su mandato.
 - d) Por incompatibilidad sobrevenida.
 - e) Por condena por delito en virtud de sentencia firme.
 - f) Por incapacidad declarada en decisión judicial firme.
3. Una vez expirado el plazo del mandato correspondiente, los miembros del Tribunal continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta la toma de posesión de los nuevos miembros. Si durante el período de duración del mandato se produjese el cese de algún titular, su sucesor cesará al término del referido mandato.

Artículo 6. *Incompatibilidades y deber de abstención de sus miembros.*

1. Los cargos de Presidente y Vocales del Tribunal son incompatibles con el ejercicio de la carrera judicial o fiscal.

2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse en aquellos supuestos de actuación del órgano respecto de los que puedan tener un interés directo o indirecto, o en que exista relación de parentesco, amistad o enemistad manifiesta con personas que puedan tener interés en dicha actuación. En todo caso, serán de aplicación a los miembros del Tribunal las mismas normas sobre abstención y recusación establecidas en las normas reguladoras del procedimiento administrativo aplicables a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

3. Las mismas normas de abstención y recusación deberán observarse cuando el Tribunal deba actuar en relación con asuntos o materias en las que alguno de sus miembros haya intervenido como asesor o representante de una de las partes interesada en el procedimiento.

Artículo 7. Retribuciones.

Los miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón no percibirán retribuciones periódicas de clase alguna por el desempeño de su función. No obstante, recibirán las indemnizaciones y dietas que se establezcan reglamentariamente por la asistencia a reuniones o redacción de ponencias.

Artículo 8. Funcionamiento del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón.

1. El funcionamiento del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón se ajustará a lo establecido en la normativa estatal y de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre régimen jurídico de los órganos colegiados.

2. El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón elaborará y aprobará su reglamento de régimen interno de funcionamiento, que se publicará en el «Boletín Oficial de Aragón».

Artículo 9. Dotación de medios del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón.

1. En los presupuestos anuales de la Comunidad Autónoma de Aragón, en la Sección correspondiente al Departamento competente en materia de economía, se dotarán las cantidades necesarias para asegurar el adecuado funcionamiento del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón.

2. El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón tendrá el apoyo administrativo del personal del Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de economía que le sea adscrito.

CAPITULO TERCERO

EL SERVICIO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y EL REGISTRO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Sección 1ª. Naturaleza y funciones del Servicio de Defensa de la Competencia.

Artículo 10. Creación y adscripción del Servicio de Defensa de la Competencia.

Dentro del Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de economía existirá un Servicio de Defensa de la Competencia, que dependerá del titular del órgano directivo que se determine en el correspondiente Decreto de estructura orgánica del citado Departamento.

Artículo 11. Funciones.

El Servicio de Defensa de la Competencia realizará las funciones siguientes:

- a) Instruir y, en su caso, informar los procedimientos administrativos cuya resolución sea competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, según lo establecido en las letras a) y b) del artículo 3 del presente Decreto.
- b) Vigilar la ejecución y cumplimiento de las resoluciones que se adopten en aplicación de este Decreto.
- c) Comunicar al Servicio estatal de Defensa de la Competencia las denuncias y solicitudes de autorización singular que reciba, así como las conductas detectadas de oficio respecto de las que existan indicios racionales de infracción, según lo establecido en el artículo 2 de la Ley 2/2002.
- d) Recibir del Servicio estatal de Defensa de la Competencia la comunicación que éste le haga de las denuncias y solicitudes
 - a) de autorización singular que reciba, así como de las actuaciones que dicho órgano practique de oficio sobre las conductas que existan indicios racionales de infracción, según lo establecido en el artículo 2 de la Ley 2/2002.

- e) Realizar, a solicitud del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, los estudios e investigaciones necesarios para que éste pueda ejercer sus atribuciones.
- f) Emitir informe, a requerimiento del Servicio estatal de Defensa de la Competencia, en relación con aquellas conductas que, afectando a un ámbito supraautonómico o al conjunto del mercado nacional, incidan, de forma significativa, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2002.
- g) Solicitar, en su caso, la convocatoria de la Junta Consultiva en materia de conflictos previstos en el artículo 3 de la Ley 1/2002.
- h) Llevar la gestión administrativa del Registro de Defensa de la Competencia de Aragón.
- i) Comunicar a los órganos estatales de Defensa de la Competencia los procedimientos que afecten o puedan afectar a la libre competencia en el ámbito supraautonómico o en el conjunto del mercado nacional.
- j) Cualquier otra que le atribuya el ordenamiento jurídico.

Sección 2ª. - El Registro de Defensa de la Competencia de Aragón.

Artículo 12. Registro de Defensa de la Competencia de Aragón.

1. El Servicio de Defensa de la Competencia llevará un Registro donde se inscribirán los acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas que el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón haya autorizado y los que haya declarado prohibidos total o parcialmente.
2. El Registro será público, en los términos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. Las inscripciones en el Libro se realizarán en cualquier tipo de soportes materiales capaces de recoger y expresar, sin duda alguna y con la garantía de permanencia e inalterabilidad, todas las circunstancias que legal o reglamentariamente hayan de hacerse constar.

CAPITULO CUARTO

PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ARAGON Y EL SERVICIO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Sección 1ª. Procedimiento y recursos.

Artículo 13. Procedimiento.

Los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón y las actuaciones ante el Servicio de Defensa de la Competencia se tramitarán según las normas contenidas en la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia y, en su defecto, por las normas que rigen el procedimiento administrativo común.

Artículo 14. Recursos contra las actuaciones del Servicio de Defensa de la Competencia y contra las resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón.

1. Podrán recurrirse ante el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, en los plazos señalados en la Ley 16/ 1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, los actos de archivo y de trámite del Servicio de Defensa de la Competencia que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.

2. La adopción de medidas cautelares y las resoluciones definitivas que dicte el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón no podrán recurrirse en vía administrativa.

3. Contra las resoluciones de los recursos a que se refiere el número 1 de este artículo y contra las resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, a que se refiere el número anterior, cabe recurso ante los órganos competentes de la jurisdicción contencioso administrativa.

Sección 2ª. Disposiciones comunes.

Artículo 15. Deber de secreto y tratamiento de la información confidencial.

1. El personal al servicio de los órganos de defensa de la competencia en Aragón, así como los miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón y toda persona que tome parte en la realización de actuaciones administrativas en materia de defensa de la competencia, o que conozca tales actuaciones por la causa que

fuere, estarán obligados al debido secreto según lo establecido y con las consecuencias previstas en la legislación estatal sobre la materia.

2. El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón y el Servicio de Defensa de la Competencia podrán acordar en cualquier momento, de oficio o a instancia de interesado, que se mantengan secretos los datos o documentos que consideren confidenciales y que se adopten las medidas necesarias para la efectividad de dicho acuerdo.

Artículo 16. *Convenios con otras Autoridades de Defensa de la Competencia.*

En el marco de lo dispuesto en la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón y el Servicio de Defensa de la Competencia, para una mayor eficacia en el ejercicio de sus funciones, podrán celebrar convenios de colaboración respectivamente con el Tribunal estatal de Defensa de la Competencia y el Servicio estatal de Defensa de la Competencia para la instrucción y resolución de los procedimientos que tengan por objeto conductas que sean competencia tanto de la Comunidad Autónoma como del Estado.

Artículo 17. *Relaciones con otras Administraciones Públicas.*

Las Administraciones públicas de Aragón están obligadas a suministrar a los órganos de Defensa de la Competencia regulados en este Decreto cuanta información le requieran para una mayor eficacia en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, cualquier organismo que tenga conocimiento de hechos que puedan atentar contra las normas de defensa de la competencia deberá dar traslado de la información y documentación que esté en su poder al Servicio de Defensa de la Competencia.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.— *Elementos organizativos básicos.*

En la relación de puestos de trabajo del Departamento competente en materia de economía, se recogerán las unidades administrativas y los puestos de trabajo correspondientes al Servicio de Defensa de la Competencia.

Segunda.— *Créditos presupuestarios.*

Los órganos correspondientes tramitarán, cuando sea necesario, las modificaciones presupuestarias precisas para habilitar las dotaciones económicas suficientes para la ejecución de lo previsto en el presente Decreto.

Tercera.— Plazo para la constitución del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón.

En el plazo máximo de tres meses, desde la entrada en vigor de este Decreto, deberá procederse al nombramiento y toma de posesión de todos los miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón.

DISPOSICION DEROGATORIA

Unica.— Cláusula derogatoria.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al presente Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Habilitación para dictar normas de desarrollo.

Se faculta al Consejero competente en materia de economía para dictar cuantas normas sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Segunda. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».

RESOLUCION de 2 de febrero de 2007, de la Presidencia del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, por la que se dispone la publicación del Reglamento de Régimen interno de este órgano.

El artículo 8, apartado 2 del Decreto del Gobierno de Aragón 29/2006, de 24 de enero, por el que se crean y regulan los órganos de Defensa de la Competencia de Aragón, prevé la elaboración de un Reglamento de régimen interno de funcionamiento del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón.

Constituido este Tribunal y comenzado su funcionamiento, ha considerado que una de sus primeras actividades debía ser, en cumplimiento del citado precepto normativo, aprobar un Reglamento que posibilitara un adecuado cumplimiento de las funciones que aquél está llamado a cumplir.

En consecuencia, y conforme con lo preceptuado, el tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, en su sesión celebrada el día 17 de enero de 2007, ha acordado, por unanimidad, dotarse del siguiente Reglamento, cuya publicación se insta en el «Boletín Oficial de Aragón».

CAPITULO PRIMERO

DE LA NATURALEZA Y FUNCIONES DEL TRIBUNAL

Artículo 1. *Marco normativo.*

El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón es el órgano colegiado que, en el marco de lo establecido en la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, así como en el Decreto 29/2006, de 24 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se crean y regulan los órganos de Defensa de la Competencia en Aragón, tiene encomendada la finalidad de promover y preservar, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón, el funcionamiento competitivo de los mercados y la existencia de una competencia efectiva en los mismos.

Artículo 2. *De la autonomía orgánica y funcional.*

1. El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón ejerce sus funciones con autonomía funcional, con el fin de asegurar su objetividad y plena independencia y sometimiento al ordenamiento jurídico.
2. El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón está adscrito orgánicamente al Departamento competente en materia de Economía, sin que ello implique dependencia orgánica alguna en el cumplimiento de las funciones que normativamente tiene atribuidas.
3. Para el cumplimiento de sus funciones el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón goza de los derechos y prerrogativas que se reconocen al Tribunal estatal de Defensa de la Competencia, en la Ley 16/1989, de 17 de julio; así como en el Decreto 29/2006, de 24 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se crean y regulan los órganos de Defensa de la Competencia en Aragón, y, en particular, de la potestad de efectuar intimaciones y requerimientos e imponer sanciones y multas coercitivas, que en ella se prevé.
4. El Tribunal tiene su sede en la capital de la Comunidad Autónoma de Aragón, extiende su competencia a todo el territorio de la misma y goza del mismo tratamiento que el Tribunal estatal de Defensa de la Competencia.

Artículo 3. Funciones.

1. El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón desempeña las funciones atribuidas en los artículos 3 y concordantes del Decreto 29/2006, de 24 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se crean y regulan los órganos de Defensa de la Competencia en Aragón.
2. En el marco de las oportunas relaciones de coordinación y cooperación con otros órganos u Organismos análogos del Estado o de otras Comunidades Autónomas el Tribunal podrá celebrar, previa autorización del Gobierno de Aragón, convenios de colaboración, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero.
3. En el desempeño de sus funciones, y en particular, en su actuación de promoción y realización de estudios y trabajos de investigación en materia de competencia, el Tribunal podrá celebrar los oportunos convenios de colaboración con entidades e instituciones especializadas en la materia, de conformidad con las previsiones presupuestarias que fueran asignadas en el presupuesto del Departamento competente en materia de economía.

CAPITULO SEGUNDO

COMPOSICION Y ESTATUTO DE SUS MIEMBROS

Artículo 4. *Composición.*

1. De acuerdo con cuanto dispone el Decreto del Gobierno de Aragón 29/2006, de 24 de enero, el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón está integrado por un Presidente y cuatro Vocales, los cuáles deberán contar con una contrastada cualificación técnica en el mundo del Derecho, la Economía u otros sectores profesionales relacionados con la materia de la libre competencia en los mercados.

2. El Tribunal contará con un Secretario, con voz pero sin voto, que será un funcionario del Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de Economía; así como también con un Letrado de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, que asistirá a las sesiones del Tribunal, con voz pero sin voto.

Artículo 5. *Nombramiento.*

1. El Presidente y los vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón serán nombrados por Decreto del Gobierno de Aragón, a propuesta del Departamento competente en materia de Economía, por un período de cinco años, renovable por una sola vez.

2. Cumplido el plazo de cinco años, los miembros del Tribunal continuarán en funciones hasta tanto se produzca un nuevo nombramiento o, en su caso, su renovación. Durante el tiempo en que se encuentren en funciones, desempeñarán su cargo respectivo con plenitud de derechos y obligaciones.

Artículo 6. *Cese.*

1. El cese en su cargo de los miembros del Tribunal de la Competencia de Aragón podrá ser acordado, con sujeción en cada caso al procedimiento regulado en este artículo, por el Gobierno de Aragón, cuando concurra cualquiera de las causas siguientes:

- a) Fallecimiento.
- b) Renuncia.

- c) Expiración del plazo de su mandato.
- d) Incompatibilidad sobrevenida y no resuelta a favor del desempeño del cargo en el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón
- e) Condena por delito en virtud de sentencia firme.
- f) Incapacidad permanente declarada por resolución judicial firme
- g) Incumplimiento grave de los deberes de su cargo, apreciado y propuesto al menos por tres miembros del Tribunal, previa audiencia del interesado.

2. El acuerdo de propuesta de cese a que se refiere la letra g) del apartado anterior, será adoptado por el Tribunal a instancia de su Presidente. En el caso de que el incumplimiento grave de los deberes de su cargo se reproche al Presidente, el Tribunal se reunirá y acordará lo procedente, previa convocatoria y con el voto favorable de tres de sus miembros. Para la válida constitución del pleno del Tribunal a los efectos previstos en este apartado, bastará con la convocatoria que hicieran dos de sus miembros, de común acuerdo entre ellos.

3. La incompatibilidad a que se refiere la letra d) del apartado 1 de este artículo, será apreciada por el Gobierno de Aragón, de oficio o a propuesta del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón.

4. Si durante el período de duración del mandato de los miembros del Tribunal se produjere el cese de alguno de ellos, su sucesor cesará al término del referido mandato.

5. Los miembros del Tribunal en quien concurra alguna de las circunstancias mencionadas en las letras d), e), f) y g) del apartado 1 de este artículo, no serán convocados a las reuniones ni participarán en ninguna actividad del Tribunal desde el momento en que se tenga conocimiento de la resolución judicial a que se refieren las letras e) y f), o hayan sido adoptados los acuerdos mencionados en el resto de las letras. En los supuestos contemplados en las letras b) y c) mencionadas, se estará a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, de este Reglamento.

6. El Presidente y Vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, con independencia de lo establecido en los apartados anteriores, podrán ser suspendidos de su cargo, por el Gobierno de Aragón, en los casos siguientes:

- a) Cuando se dictare contra ellos auto de prisión o de procesamiento o imputación por delito doloso.
- b) Cuando se dictara su declaración de incapacidad transitoria.
- c) Cuando tal suspensión se imponga, como pena principal o accesoria, en virtud de sentencia judicial firme.

Artículo 7. Incompatibilidades y deber de abstención.

1. Los cargos de Presidente y Vocales del Tribunal son incompatibles con el ejercicio de las Carreras judicial y fiscal.

2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse en aquellos supuestos de actuación del mismo, respecto de los que pudieran tener un interés directo o indirecto, o en que concurra relación de parentesco, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, amistad o enemistad manifiesta, con personas o titulares de órganos de gobierno de personas jurídicas, que pudieran tener interés en tal actuación.

La misma obligación de abstención deberán observar los miembros del Tribunal, cuando éste deba actuar en asuntos o materias, en los que hayan intervenido, como asesor, defensor o representante de persona, entidad u órgano interesado en tal actuación.

3. Cuando alguna persona, Entidad u órgano a quien afectara una actuación del Tribunal planteara recusación de algún miembro del Tribunal y éste no se abstuviera voluntariamente o alegara en contra de la concurrencia de la causa de abstención denunciada, el Presidente, o el Vocal que hubiera de sustituirle si él fuera el recusado, convocará con urgencia reunión del Tribunal, en la que, por mayoría y previa audiencia del recusado, se decidirá lo procedente.

El incumplimiento del deber de abstención, cuando definitivamente procediera, podrá dar lugar, en su caso, a la apreciación de la concurrencia de la causa de cese prevista en el artículo 6, apartado 1, letra g), de este Reglamento.

4. Serán de aplicación supletoria en esta materia las normas sobre recusación y abstención establecidas en la regulación del procedimiento administrativo común en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 8. Obligación de guardar secreto.

1. Los miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón están obligados a guardar secreto en relación a los asuntos o materias que sean objeto de las actuaciones del mismo, en tanto no hayan sido publicadas; y en todo caso y sin límite temporal, respecto del sentido de las deliberaciones mantenidas en las sesiones del Tribunal y de los votos emitidos en ellas.
2. La misma obligación se extenderá a todas las personas que, por razón de su profesión, cargo o función que tuvieren encomendada, participaran en la tramitación de los procedimientos seguidos ante el Tribunal o tuvieren conocimiento de los temas o asuntos que fueran objeto de las actuaciones del mismo.
3. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran resultar exigibles a los infractores de este deber de secreto, la violación del mismo se considerará causa de cesa prevista en el artículo 6. 1.g.

Artículo 9. Retribuciones.

1. Los miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia no percibirán retribuciones periódicas por el desempeño de su cargo. Su labor, así como la del Secretario, cuando éste no preste sus servicios con dedicación exclusiva al Tribunal, y la del Letrado de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón asignado al Tribunal, será compensada mediante dietas de asistencia a las reuniones celebradas, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan por la redacción de proyectos y ponencias de estudios, informes, dictámenes y resoluciones del Tribunal.
2. La cuantía de las dietas de asistencia y de las indemnizaciones se acordará por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón, oído el Tribunal.

CAPITULO TERCERO

ORGANIZACION DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ARAGON

Artículo 10. Órganos.

1. El Tribunal de Defensa de la Competencia actuará en Pleno o a través de su Presidente, de acuerdo con las previsiones de este Reglamento.
2. Forman el Pleno el Presidente y todos los Vocales del Tribunal.

Artículo 11. Funciones del Presidente.

1. Corresponden al Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón las siguientes funciones:

- a) La representación ordinaria del Tribunal.
- b) La representación del Gobierno de Aragón en el Pleno del Consejo de Defensa de la Competencia,
- c) La designación de los representantes del Tribunal que deban asistir a las sesiones de la Junta Consultiva en materia de conflicto.
- d) La convocatoria y presidencia de las sesiones del Pleno, dirimiendo con su voto de los empates que, en su caso, se produzcan en el procedimiento de adopción de acuerdos.
- e) Autorizar con su firma los estudios, informes, dictámenes y resoluciones que apruebe el Pleno del Tribunal, y ejecutar todos sus acuerdos.
- f) La ordenación del régimen interior del Tribunal, ejerciendo la superior inspección de sus servicios.
- g) Dar cuenta al Gobierno de Aragón de las vacantes que ocurran en las plazas de Vocales del Tribunal.
- h) Decidir, mediante la oportuna resolución, sobre las dudas que se susciten en la aplicación de la normativa reglamentaria interna del Tribunal. Si el Presidente lo considerara oportuno, podrá recabar, a estos efectos, la opinión del pleno del Tribunal.
- i) Informar periódicamente al Pleno de todas sus iniciativas y actuaciones que pudieran ser de interés.
- j) Las demás funciones que específicamente le resulten asignadas por la normativa sobre defensa de la competencia en Aragón.

2. El Presidente del Tribunal podrá delegar el ejercicio de alguna o algunas de las funciones concretas que tiene encomendadas, con carácter general o particular, en cualquiera de los Vocales del Tribunal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de este Reglamento.

Artículo 12. Sustitución del Presidente.

En los supuestos de ausencia, enfermedad, incapacidad, abstención o recusación o vacancia del Presidente, le sustituirá en sus funciones el Vocal más antiguo del Tribunal; y, en caso de igualdad, el de mayor edad. El Presidente en funciones ostentará también voto de calidad.

Artículo 13. Funciones del Pleno.

Corresponde al Pleno del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón el ejercicio de las funciones atribuidas por el artículo 2 del Decreto del Gobierno de Aragón 29/2006, de 24 de enero, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 3 y 11 de este Reglamento.

Artículo 14. El Secretario del Tribunal.

1. Corresponde al Secretario del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón:

- a) Preparar y enviar las convocatorias del Pleno y de la Comisión Permanente del Tribunal, a iniciativa de su Presidente.
- b) Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del Pleno, levantando el Acta de las mismas.
- c) Preparar y enviar a los miembros del Tribunal la documentación que haya de ser sometida a examen o deliberación en sus sesiones.
- d) Auxiliar en sus funciones a los miembros del Tribunal, en particular a los ponentes encargados de la preparación de los proyectos de estudios, informes, dictámenes o resoluciones.
- e) Colaborar con el Presidente del Tribunal en la elaboración del anteproyecto de Presupuesto general de gastos del mismo, y en la de la Memoria anual de la situación de la competencia en Aragón y de las actividades realizadas por el Tribunal.
- f) Custodiar el archivo del Tribunal, los libros de Actas de las sesiones del mismo, las propias Actas y restante documentación que refleje y documente la actuación de aquél.
- g) Llevar el Registro de entrada y salida de documentos del Tribunal.
- h) Auxiliar al Presidente en la dirección del personal propio del Tribunal o adscrito al mismo.

- i) Expedir certificaciones referidas al contenido de las actas, documentación y archivo del Tribunal.
- j) Cualquier otra función que específicamente le encomiende el Presidente del Tribunal o este Reglamento.

2. En los casos de vacancia, ausencia, o enfermedad del Secretario, el Presidente encomendará a uno de los vocales la función de levantar acta de la sesión que se celebre en esta circunstancia. Las demás funciones propias del Secretario serán desempeñadas temporalmente por el funcionario del departamento competente en materia de economía que a tal efecto se designe.

CAPITULO CUARTO

FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ARAGON

Artículo 15. *Convocatoria de las sesiones.*

1. El Presidente convocará las sesiones del Pleno del Tribunal, de oficio o a instancia de al menos tres de los Vocales que lo componen.

Lo anterior se entiende con independencia de lo dispuesto en el artículo 6 de este Reglamento para los supuestos específicos contemplados en ellos.

2. La convocatoria se realizará por escrito dirigido al domicilio de cada Vocal, o a un correo electrónico indicado por éste, con una antelación mínima de tres días. La convocatoria incluirá el orden del día y, en su caso, será acompañada de la documentación adecuada para tratar los asuntos sometidos a la consideración de los Vocales.

3. Cuando razones de urgencia lo aconsejen, se podrá sustituir la forma de convocatoria indicada en el apartado anterior, por cualquier otra que deje constancia de la recepción de la misma por sus destinatarios, siempre que se cite a los Vocales con una antelación mínima de veinticuatro horas.

Artículo 16. *Asistencia a las sesiones.*

1. El Pleno y la Comisión Permanente del Tribunal quedarán válidamente constituidos cuando, previa convocatoria, asistan a sus sesiones la mayoría absoluta de sus miembros con voz y voto.

2. Los Vocales que no asistan a las sesiones podrán hacer llegar al órgano respectivo, por conducto de su Presidente, su opinión en relación con cualquiera de

los asuntos que figuren en el orden del día. En ningún caso tal opinión podrá ser considerada como un voto.

Artículo 17. Adopción de acuerdos v votos particulares.

1. Los acuerdos del Pleno del Tribunal se adoptarán por mayoría simple de votos de los asistentes, decidiendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente.

2. En todo caso será posible la formulación de votos particulares por los miembros del Tribunal que se pronuncien en contra de la voluntad de la mayoría.

Los votos particulares habrán de ser formulados por escrito motivado, y remitidos, en el plazo de 48 horas siguientes al de adopción del acuerdo al que los mismos se refieran.

Artículo 18. Actas de la sesiones.

1. De las sesiones celebradas por el Pleno del Tribunal, se levantará Acta por el Secretario del mismo.

2. Las Actas de las sesiones comprenderán la expresión de los siguientes extremos:

- a) El día, hora y lugar en que se celebra la sesión del Pleno.
- b) Los asuntos comprendidos en el orden del día de su convocatoria o en su modificación.
- c) Los acuerdos adoptados y el régimen de votos emitidos en relación con los mismos.
- d) Las opiniones particulares de los Vocales, en el supuesto de que éstos interesen que aquéllas figuren en el Acta.

3. El Acta será redactada y leída por el Secretario y, en su caso, aprobada por los Vocales presentes, en la misma sesión o en la próxima inmediata siguiente.

4. El Acta, una vez aprobada, será firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente, e incorporada al Libro de Actas correspondiente.

5. Como Anexo al Acta de cada sesión figurarán los estudios, informes, dictámenes y resoluciones que hubiesen sido aprobados por el Pleno del Tribunal en la sesión correspondiente. Si existieren, se incorporarán también al Anexo los votos particulares que se hubieran formulado por los asistentes a la sesión.

Artículo 19. Notificación de los acuerdos y resoluciones.

1. Los acuerdos y resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón serán notificados en forma fehaciente a los interesados respectivos.
2. Las resoluciones sancionadoras del Tribunal, una vez notificadas a los interesados, se publicarán en el «Boletín Oficial de Aragón», y en uno o varios diarios de los de mayor circulación en la Comunidad Autónoma de Aragón, y de la provincia donde tengan el domicilio o realicen las prácticas las personas o empresas sancionadas. El coste de la publicación de tales resoluciones en la forma indicada, correrá a cargo de la persona o empresa sancionada.

El Tribunal podrá asimismo acordar, cuando lo estime conveniente, la publicación de las resoluciones no sancionadoras que adopte, en la forma prevista en el párrafo anterior.

Artículo 20. Derecho supletorio.

En todo lo no regulado específicamente en este Capítulo, se aplicará al funcionamiento del Pleno del Tribunal, el régimen jurídico propio del funcionamiento de los órganos colegiados de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

CAPITULO QUINTO

DE LOS PROCEDIMIENTOS

Artículo 21. Disposiciones comunes.

1. Tras el registro de entrada en el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón de un expediente o solicitud de informe, dictamen o arbitraje, el Presidente lo presentará en la sesión inmediatamente posterior que celebrara el Pleno, con el informe del Secretario sobre el cumplimiento de los requisitos formales exigibles en cada caso. El Pleno del Tribunal adoptará el pertinente acuerdo procediendo a evacuar el trámite de admisión.
2. Corresponde al Presidente del Tribunal designar entre los Vocales del mismo uno o varios Ponentes para cada expediente, informe, dictamen o arbitraje que haya de resolver o emitir.
3. Según los casos, corresponderá al Ponente:

- a) Examinar las proposiciones de prueba que formulen los interesados, informando y proponiendo al Pleno su admisión o denegación.
- b) Presidir, con asistencia del Secretario, la práctica de las diligencias de prueba que hayan sido admitidas, así como, en su caso, las diligencias finales que se acuerden por el Pleno.
- c) Informar al Pleno acerca del estado de tramitación del procedimiento o asunto respecto del que haya sido nombrado Ponente.
- d) Proponer al Pleno, cuando lo estime pertinente y en cualquier momento de la tramitación, que requiera al Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón, para que formule las aclaraciones y ampliaciones de información y documentación que resulten precisas.
- e) Someter a la consideración del Pleno una ponencia o propuesta de resolución del expediente, informe, dictamen o arbitraje, así como la de adopción de medidas cautelares que juzgara oportuno.

A la vista del resultado de la deliberación sobre tal ponencia, el Presidente, por su propia iniciativa o a instancias del Ponente, podrá, excepcionalmente y atendiendo a circunstancias especiales, encomendar la redacción de la resolución, informe, o dictamen a otro vocal del Tribunal.

4. En la tramitación de los expedientes se observará escrupulosamente el orden de entrada de los mismos, sin perjuicio de que el Pleno pueda acordar, de forma excepcional y motivada, la alteración de dicho orden por motivos de urgencia o de coherencia en la actuación del Tribunal.

5. En relación al cómputo, suspensión o prórroga de los plazos, ordenación de los trámites, notificaciones, citaciones y emplazamientos y cualquier otro aspecto procedimental que afecte a los expedientes que ha de resolver el Tribunal, será aplicable lo dispuesto en la normativa vigente en materia de defensa de la Competencia, y, supletoriamente, el régimen jurídico propio del procedimiento administrativo común tramitado ante la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 22. Disposiciones relativas a los procedimientos que versen sobre conductas prohibidas v cuya resolución corresponda al Pleno del Tribunal.

1. Recibido el expediente, el Pleno del Tribunal resolverá sobre su admisión en un plazo de cinco días, teniendo en cuenta si se han aportado al mismo los

antecedentes y documentos necesarios. En otro caso interesará del Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón la práctica de las diligencias oportunas, que podrán ser complementadas por las que éste considere pertinentes.

2. Si el Tribunal admitiese a trámite el expediente, lo pondrá de manifiesto a los interesados por el plazo de quince días, dentro del cual podrán solicitar la celebración de vista y proponer las pruebas que estimen pertinentes y necesarias.

El Tribunal podrá disponer de oficio la práctica de cuantas pruebas estime procedentes, concediendo a los interesados la posibilidad de intervenir en ella.

3. El resultado de todas las diligencias de prueba practicadas, se pondrá de manifiesto a los interesados, para que en los diez días siguientes puedan formular las alegaciones que estimen, acerca de la importancia y alcance de aquéllas.

4. Contra las decisiones del Tribunal en materia de prueba, no se admitirá recurso alguno en vía administrativa.

5. Concluido el trámite de alegaciones y proposición y práctica de pruebas, el Pleno del Tribunal acordará, si lo estima necesario, la celebración de vista, que será reservada y contradictoria, pudiendo intervenir en ella los interesados o sus representantes, el Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón y las personas especializadas en la materia cuyo asesoramiento haya podido requerir, discrecionalmente, el Tribunal.

Si el Tribunal no estima necesaria la celebración de vista, concederá a los interesados un plazo de quince días para formular conclusiones.

6. Celebrada la vista o transcurrido el plazo de formulación de conclusiones, y antes de dictar resolución, el Tribunal podrá acordar la práctica de cualquier diligencia final de prueba, incluso la declaración de los interesados y la de reconocimiento; y recabar nuevos informes del Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón y de cualquier otro Organismo, autoridad o particular, competente o especialista sobre la cuestión, que el propio Tribunal determine.

La providencia que acuerde tales diligencias finales establecerá, siempre que fuere posible, el plazo en que debas practicarse, y la intervención que los interesados hayan de tener en ellas.

Las pruebas acordadas como diligencia final se practicarán ante el Vocal del Tribunal designado Ponente.

7. El Tribunal podrá convocar al Instructor del expediente, para que lo ilustre sobre aspectos determinados del mismo, siempre que lo estime conveniente.

Oirá en todo caso al Instructor cuando el Tribunal, al dictar resolución, estime que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por el Servicio, al ser susceptible de otra calificación.

Esta nueva calificación se someterá a los interesados para que en el plazo de quince días formulen las alegaciones que estimen oportunas, con suspensión del plazo para dictar resolución.

8. Concluidas las actuaciones, el Tribunal dictará la resolución que proceda en el plazo máximo de veinte días.

La resolución podrá declarar:

- a) La existencia de prácticas prohibidas.
- b) No resultar acreditada la existencia de prácticas prohibidas.
- c) La autorización de acuerdos o prácticas exceptuables.

9. Las resoluciones del Tribunal, que en todo caso pondrán fin a la vía administrativa, podrán contener:

- a) La orden de cesación de las prácticas prohibidas en un plazo determinado.
- b) La imposición de condiciones u obligaciones determinadas.
- c) La orden de remoción de los efectos de las prácticas prohibidas contrarias al interés público.
- d) La imposición de multas.
- e) La calificación de práctica autorizada.
- f) Y cualesquiera otras medidas para cuya adopción se encuentre autorizado por la propia ley.

10. El Tribunal podrá, de oficio o a instancia de parte, aclarar conceptos oscuros o suplir cualquier omisión que contengan sus resoluciones, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de las mismas o, en su caso a la petición de aclaración o adición que deberá presentarse dentro del plazo improrrogable de tres días siguientes a dicha notificación.

Los errores materiales y los aritméticos podrán ser corregidos por el Tribunal en cualquier momento.

11. Las resoluciones del Tribunal son susceptibles de recurso contencioso-administrativo, con sujeción a lo dispuesto en la Ley reguladora de tal Jurisdicción.

Artículo 23. Disposiciones relativas a procedimientos que versen sobre autorizaciones singulares.

1. El procedimiento para la tramitación y resolución de solicitudes de autorización singular de acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas prohibidas, se sujetará a los trámites previstos en el Capítulo II del Real Decreto 378/2003, de desarrollo de la Ley estatal, de Defensa de la Competencia, en materia de exenciones por categorías, autorización singular y registro de defensa de la competencia.

2. La resolución que dicte el Pleno del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón poniendo fin a estos procedimientos, que será debidamente notificada y registrada, si denegare la solicitud de autorización, intimará, en su caso, a los solicitantes y a los demás autores de las prácticas prohibidas que hayan sido parte del expediente, para que desistan de las mismas, previniéndoles de que si con posterioridad a la notificación de la resolución desobedecieran la intimación, podrán incurrir en las pertinentes sanciones y, en su caso en el delito de desobediencia.

Artículo 24. Disposiciones relativas a la adopción de medidas cautelares.

1. El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, de oficio o a propuesta del Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón, podrá adoptar las medidas cautelares necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que en su momento dicte y, en especial, las siguientes:

- a) Ordenar la cesación o la imposición de condiciones determinadas para evitar el daño que pudieran causar las conductas a que el procedimiento se refiera.
- b) Exigir fianza de cualquier clase, excepto la personal, que se estime bastante para responder de la indemnización de los daños y perjuicios que se pudieran causar.

En el caso de que fueran los interesados quienes propongan la adopción de medidas cautelares, el Tribunal podrá exigir de los mismos la prestación de fianza adecuada.

4. El Tribunal oír a los interesados en el plazo de cinco días y resolverá en los tres siguientes sobre la procedencia de las medidas cautelares propuestas o interesadas. El Tribunal, no obstante, podrá obviar este trámite y no oír a los afectados, si las circunstancias así lo aconsejaren

5. No se podrán dictar medidas cautelares que puedan originar perjuicios irreparables a los interesados, o que impliquen violación de sus derechos fundamentales.

6. El Tribunal, de oficio o a propuesta del Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón podrá, dentro del marco y con las garantías previstas en la normativa sobre defensa de la competencia, imponer multas coercitivas para asegurar el cumplimiento de las medidas cautelares.

7. El Tribunal, de oficio o a propuesta del Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón, podrá en cualquier momento del procedimiento acordar la suspensión, modificación o revocación de las medidas cautelares que hubiera adoptado, en atención a circunstancias sobrevenidas o que no hubieran podido ser conocidas al tiempo de su adopción.

8. La adopción de medidas cautelares no podrá exceder en ningún caso de seis meses, y las mismas deberán cesar en todo caso cuando resulte ejecutada la resolución del Tribunal.

Artículo 25. Disposiciones relativas a la elaboración de informe en los procedimientos que versen sobre control de concentraciones económicas.

1. Recibida la oportuna solicitud de informe remitida por los órganos de la Administración Central, el Tribunal de Defensa de la Competencia en Aragón emitirá éste, con sujeción, en la medida en que resulte aplicable, a los trámites previstos en la Sección Tercera, del Capítulo II, del Real Decreto 1.443/2001, de 21 de diciembre, de desarrollo de la Ley estatal de Defensa de la Competencia, en lo referente al control de las concentraciones económicas.

2. Emitido el informe, en los términos y con el alcance establecido en la normativa vigente, y en el plazo de dos meses desde la recepción del expediente por el Tribunal, se remitirá por éste al Consejero competente en materia de economía del Gobierno de Aragón, para que lo eleve a éste.

3. El Tribunal comunicará a los notificantes de la operación de concentración económica la fecha de la remisión de su informe al expresado Consejero del Gobierno de Aragón.

Artículo 26. Disposiciones relativas a la emisión de informes.

1. Cuando el Tribunal de Defensa de la Competencia en Aragón recibiera una solicitud de informe, su Presidente lo comunicará al Pleno en la sesión inmediatamente posterior a la fecha en que tal solicitud se hubiera registrado.

2. En dicha sesión, el Tribunal se pronunciará sobre la procedencia en Derecho de la solicitud, acordando cuanto fuera necesario

3. El Presidente del Tribunal, de acuerdo con cuanto previene el artículo 21.2 de este Reglamento designará un Ponente para la elaboración del Informe solicitado. En el plazo de un mes el ponente designado formulará, a través del Presidente, la correspondiente propuesta de Informe, para que sea debatida y, en su caso, aprobada por el Pleno. Si las circunstancias así lo justificaran, y mediante solicitud del ponente, el Presidente podrá prorrogar ese plazo por otro mes más, pudiendo renovarse, en su caso, y por iguales períodos, la prórroga acordada.

Artículo 27. Disposiciones relativas a la tramitación de los recursos.

1. Los actos del Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón que dispongan el archivo del expediente y los de trámite que determine la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión a los interesados, serán susceptibles de recurso ante el Pleno del Tribunal en el plazo de diez días.

2. El recurso se presentará ante el Tribunal y dará lugar a que por su Secretario se reclame al Servicio la remisión del expediente con su informe en el plazo de tres días.

Si el Secretario aprecia que el recurso se ha interpuesto fuera de plazo, propondrá al Pleno su inadmisión, sin más trámite, por extemporaneidad.

3. Recibido el expediente, se pondrá de manifiesto a los interesados para que en plazo de quince días formulen alegaciones y presenten los documentos que estimen pertinentes. Cumplido este trámite, el Pleno del Tribunal resolverá el recurso en el plazo de diez días, sin que contra su decisión quepa recurso alguno en vía administrativa.